

Honorable,

**JUZGADO SESENTA Y TRES (63) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ –
SECCIÓN TERCERA.**

jadmin63bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

RADICADO: 11001334306320230014800

DEMANDANTE: INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A

DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

LLAMADA EN GARANTIA: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

ASUNTO: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado especial del **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el NIT. 860.002.400-2, por medio del presente dentro del término y oportunidad me permito presentar ante el despacho **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**, en los siguientes términos:

I. OPORTUNIDAD

Por medio de auto de 05 de marzo de 2025, el cual fue notificado por estado del 6 de marzo de la misma anualidad, el despacho corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mencionado proveído.

Es por lo anterior, que el termino antes indicado por el despacho fenece el 20 de marzo de 2025, por lo tanto, el presente escrito de alegatos se eleva al despacho dentro del término y oportunidad procesal.

II. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

A) DE LO PROBADO EN EL PROCESO.

Conforme a las pruebas practicadas en el proceso, se advierte que no existe evidencia concluyente que permita atribuir responsabilidad a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por la presunta entrega irregular de recursos, ni que indique la existencia de actos deshonestos o fraudulentos por parte de estos. Por el contrario, del acervo probatorio se desprende que los servidores públicos del IDU actuaron en cumplimiento de los procedimientos establecidos y con fundamento en la documentación allegada, la cual, en su momento, gozaba de la presunción de autenticidad y legalidad.

En este sentido, el dictamen pericial grafológico practicado en el curso del proceso se limitó exclusivamente a determinar la autenticidad de una firma sobre una fotocopia, sin extenderse al análisis de otros elementos documentales relevantes, como los sellos o la autenticidad integral del documento que sirvió de base para la actuación administrativa. Lo anterior, tal como lo manifestó el perito, restringe la certeza sobre la eventual falsedad del documento y, por consiguiente, impide afirmar que los funcionarios del IDU hubiesen actuado con dolo o culpa grave en la gestión de los recursos.

Adicionalmente, del acervo probatorio se desprende la configuración del hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, toda vez que la presunta irregularidad en la entrega de los dineros se originó en la actuación de un particular, identificado como Víctor Hugo Jiménez Castro, quien habría presentado documentos para la solicitud de pago, sin que existiera un indicio claro que permitiera a los funcionarios del IDU cuestionar su autenticidad en ese momento. Dicho actuar, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, constituye una circunstancia extraña y ajena a la administración que rompe el nexo causal entre el daño alegado y la conducta de los funcionarios públicos, excluyendo la responsabilidad de la entidad demandada.

Por otra parte, resulta relevante señalar que, según lo informado en la audiencia de pruebas, el expediente penal remitido por la Fiscalía 295 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública no ha sido allegado en su totalidad al expediente. Esta circunstancia impide contar con todos los elementos de juicio necesarios para valorar de manera integral la existencia o inexistencia de responsabilidad penal sobre los hechos en

cuestión. En consecuencia, se solicita al despacho que adopte las medidas pertinentes para requerir la remisión completa del expediente penal, con el fin de garantizar la debida valoración de la prueba y evitar decisiones fundadas en información incompleta.

En mérito de lo expuesto, es evidente que no se ha demostrado la responsabilidad de los funcionarios del IDU en los hechos materia del proceso, ni se ha acreditado que estos hayan incurrido en actos deshonestos o fraudulentos. De igual manera, se configura el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, lo que impide atribuir cualquier consecuencia jurídica adversa a la entidad demandada.

B) CONFIGURACIÓN DEL HECHO DE UN TERCERO COMO EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD.

En el presente proceso, se ha demostrado que la supuesta entrega irregular de los dineros por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) fue ocasionada por la intervención de un tercero ajeno a la entidad, quien habría presentado documentación aparentemente válida para solicitar el pago de los recursos, sin que existieran elementos que permitieran dudar de su autenticidad en el momento de la actuación administrativa. Adicionalmente, la documentación con la que se gestionó el pago gozó en su momento de la presunción de autenticidad, conforme lo establece la normatividad vigente.

En este orden de ideas, resulta aplicable la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, pues se encuentra acreditado que la causa eficiente del supuesto perjuicio alegado por la parte demandante fue la actuación autónoma de un particular y no una conducta imputable a los funcionarios del IDU.

Respecto de la presente causal eximente de responsabilidad el H. Consejo de Estado ha indicado que:

“(…) Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consiste en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y **que este último no se encuentra vinculado**

de manera alguna con la actuación de aquel (...)”¹ (Subrayado fuera del texto original)

Aunado a lo anterior, el máximo órgano de cierre en la jurisdicción de lo contencioso, ha manifestado que la procedencia del eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero se da cuando:

“(…) Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado...

Por otra parte, a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante (...)”²

En ese orden de ideas, es claro que el hecho de un tercero es aquel elemento de ruptura del nexo causal entre el acto u omisión del agente y el daño que se le imputa. Por tanto, entremos a estudiar cada uno de sus requisitos a la luz del caso concreto:

¹ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente. 16530. MP. Mauricio Fajardo Gómez

² Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409 01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez.

I. Irresistibilidad.

Resulta importante señalar que las funcionarias del IDU actuaron conforme a la ley, puesto que la presentación de los documentos para el pago de los recursos era un hecho irresistible para estas. Es claro que los documentos gozan de presunciones de legalidad y de autenticidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ley 19 de 2012, el cual eliminó la exigencia de autenticaciones y reconocimientos en diversos trámites administrativos, confiando en la veracidad de los documentos presentados por los ciudadanos.

En este contexto, las servidoras del IDU no tenían motivos razonables para dudar de la validez de los documentos aportados por el tercero, pues estos cumplían formalmente con los requisitos exigidos por la normativa vigente. De hecho, su actuación se enmarcó dentro del principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, el cual impone a todas las autoridades el deber de presumir la legalidad y autenticidad de las actuaciones y documentos presentados por los administrados, salvo prueba en contrario.

Así, exigir a las funcionarias del IDU que hubieran identificado con antelación un posible fraude, sin elementos objetivos que despertaran sospechas sobre la validez de los documentos, equivaldría a imponerles una carga desproporcionada e irrazonable, contraria al principio de confianza legítima y a los lineamientos jurisprudenciales en materia de responsabilidad del Estado.

Por tanto, la actuación de las servidoras no puede ser catalogada como negligente ni mucho menos fraudulenta, sino como una gestión administrativa basada en las normas vigentes y en el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. En consecuencia, no se configura una falla en el servicio atribuible al IDU, sino un hecho atribuible exclusivamente a un tercero, lo que exonera de responsabilidad a la entidad demandada.

II. Imprevisibilidad

En segundo lugar, para el IDU era imposible prever el actuar presuntamente malintencionado del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, toda vez que no existía ningún indicio que permitiera inferir la falsedad de los documentos presentados, los cuales superaron los filtros administrativos y la verificación ante la notaría, entidad que, conforme

a la normatividad vigente, tiene la función de dar fe pública sobre la autenticidad de los actos que se otorgan ante ella.

El hecho de que la documentación presentada cumpliera formalmente con los requisitos legales refuerza la aplicación del principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, el cual establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades deben presumirse lícitas, salvo prueba en contrario. En este sentido, el IDU confió legítimamente en la veracidad de la documentación aportada por el tercero, sin que existiera una obligación legal o fáctica que exigiera una verificación adicional que desbordara el marco ordinario de revisión documental.

Adicionalmente, la imprevisibilidad de la situación se ve reflejada en el hecho de que la presunta irregularidad solo fue advertida con posterioridad, en el marco de investigaciones adelantadas por otras instancias, lo que confirma que el fraude no era detectable con los medios ordinarios de control con los que contaba la entidad al momento de la actuación.

Por tanto, el daño alegado por la parte demandante no tiene como causa una falla en el servicio del IDU, sino la actuación fraudulenta y dolosa de un tercero, lo que configura plenamente la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

A partir del material probatorio obrante en el proceso, se ha acreditado que el supuesto daño alegado por la parte demandante **fue generado exclusivamente por la actuación fraudulenta de un tercero** y no por una falta atribuible al IDU. En este sentido, se cumplen los requisitos jurisprudenciales y normativos para la configuración del **hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad**, por lo que resulta improcedente cualquier pretensión indemnizatoria en contra de la entidad demandada.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al despacho declarar probada la presente excepción y, en consecuencia, absolver al IDU de toda responsabilidad en este proceso.

**C) INEXISTENCIA DE ACTOS DESHONESTOS O FRAUDULENTOS COMETIDOS
POR LOS FUNCIONARIOS DEL IDU.**

Del análisis integral del acervo probatorio se desprende con claridad que no existen pruebas que acrediten la existencia de conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas por parte de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la actuación administrativa objeto de debate.

En efecto, los hechos objeto de controversia derivan de la presunta falsificación de documentos presentada por un tercero ajeno a la entidad, situación que no puede imputarse a los servidores públicos del IDU, quienes obraron dentro del marco de la legalidad y con base en la documentación que, al momento de su presentación, reunía los requisitos formales y gozaba de la presunción de autenticidad.

Es preciso señalar que las funcionarias del IDU no han sido objeto de sanción alguna, ni en el ámbito disciplinario ni en el penal, por los hechos objeto de investigación, lo que demuestra que no se ha acreditado una conducta irregular, fraudulenta o dolosa en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, su garantía fundamental de presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, no ha sido desvirtuada, pues no existe decisión judicial o administrativa que determine su responsabilidad en los hechos debatidos en este proceso.

Bajo este panorama, resulta improcedente cualquier afirmación que sugiera la existencia de una falta en el servicio o de un actuar deshonesto por parte de las funcionarias del IDU, pues su actuación se enmarcó en los principios de legalidad y buena fe, confiando en la autenticidad de los documentos presentados por un tercero. En consecuencia, se reitera que no existe fundamento para imputar responsabilidad a la entidad demandada, por lo que el despacho deberá declarar probadas las excepciones propuestas y, en su lugar, absolver al IDU de toda responsabilidad dentro del presente proceso.

D) INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LAS ACTUACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL IDU Y EL DAÑO ALEGADO POR LA PARTE ACTORA

En el presente proceso, no se ha demostrado la existencia de un nexo causal entre la actuación de las funcionarias del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el daño alegado por la parte actora. Por el contrario, el análisis del material probatorio evidencia que la supuesta afectación patrimonial invocada por la demandante tiene su origen exclusivo en la actuación de un tercero, quien presentó documentos aparentemente válidos que superaron los controles administrativos ordinarios, lo que impidió que las servidoras públicas del IDU pudieran detectar alguna irregularidad en el momento de la actuación.

En este orden de ideas, la ausencia de una relación de causalidad entre la actuación administrativa del IDU y el daño alegado excluye cualquier posibilidad de atribuir responsabilidad a la entidad, pues no se ha demostrado que su actuar haya sido determinante en la configuración del perjuicio reclamado.

El nexo causal es un elemento esencial dentro del régimen de responsabilidad del Estado y su ausencia impide estructurar cualquier imputación en contra de una entidad pública. El **Consejo de Estado**, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que:

“Para que surja la responsabilidad del Estado es necesario acreditar el daño antijurídico y su relación de causalidad con la acción u omisión de la Administración. Si el perjuicio invocado no es consecuencia directa de la conducta estatal, no puede exigirse a la entidad demandada que asuma la reparación del mismo”³

Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el daño proviene de la actuación de un tercero y no de la entidad pública, el nexo causal se rompe, eximiendo de responsabilidad al Estado. En este sentido, el Consejo de Estado ha señalado:

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de julio de 2018, Radicado 25000-23-26-000-2005-00084-01

“Cuando se prueba que la causa eficiente del daño es un tercero ajeno a la Administración, se configura una causal de exclusión de responsabilidad, pues el daño no le es imputable a la entidad pública”⁴

Por lo tanto, cuando el daño alegado por el demandante no tiene su origen en la actuación administrativa de la entidad, sino en hechos ajenos a ella, no es posible declarar su responsabilidad, toda vez que el vínculo causal entre el actuar estatal y el perjuicio desaparece.

A la luz de estos hechos, se concluye que el daño alegado por la parte actora no tiene su causa en la actuación de las funcionarias del IDU, sino en la conducta fraudulenta de un tercero que logró engañar a la administración con documentos presuntamente falsos.

De igual manera, la presunción de legalidad y autenticidad de los documentos presentados ante la entidad impidió que, en su momento, las funcionarias detectaran alguna irregularidad, lo que descarta la existencia de una falla en el servicio y, por ende, la configuración de un nexo causal entre la actuación administrativa y el perjuicio reclamado.

Es importante resaltar que las funcionarias del IDU no han sido sancionadas ni penal ni disciplinariamente por estos hechos, lo que refuerza su garantía de presunción de inocencia, conforme al artículo 29 de la Constitución Política, y confirma que no se ha acreditado ninguna responsabilidad en su contra.

Bajo estos parámetros, es claro que la entidad no puede ser condenada a reparar un daño cuando este no es imputable a su actuar, sino a la intervención de un tercero, lo que configura una causal de exoneración de responsabilidad. Por lo expuesto, solicito respetuosamente al despacho declarar probada la presente excepción y, en consecuencia, absolver al IDU de toda responsabilidad dentro del proceso.

E) INEXISTENCIA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS No. 1001527.

En el presente caso, la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527 suscrita con La Previsora S.A. Compañía de Seguros no ampara la eventual responsabilidad que el

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, Radicado 16530

despacho pudiera establecer sobre los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Dicha póliza fue contratada para cubrir pérdidas patrimoniales derivadas de actos deshonestos o fraudulentos cometidos por empleados del IDU, con la intención manifiesta de causar perjuicio a la entidad, y no para responder por las responsabilidades derivadas de su gestión administrativa. Así fue descrito el objeto del seguro:

2. OBJETO DEL SEGURO:

Amparar al asegurado las pérdidas, gastos y daños como consecuencia de actos deshonestos o fraudulentos cometidos por empleados del asegurado, solos o en concurso con otros, o con terceros, con la intención manifiesta de hacer que el asegurado sufra dicha pérdida.

Para el propósito pretendido, el IDU cuenta con otro tipo de pólizas, las cuales eventualmente tienen por objeto amparar a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y cubrir los perjuicios derivados de su actuación.

En consecuencia, cualquier determinación de responsabilidad que pueda recaer sobre los funcionarios del IDU no puede ser imputada a la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527, pues su objeto y cobertura no incluyen este tipo de contingencias.

En ese sentido, el H. Consejo de Estado ha dicho sobre el alcance de la cobertura de las pólizas de seguro:

“Las pólizas de seguro deben ser interpretadas conforme a su objeto y finalidad. No es admisible extender una cobertura más allá de lo pactado, pues ello desvirtuaría la naturaleza misma del contrato de seguro y afectaría el principio de especialidad de las coberturas”⁵

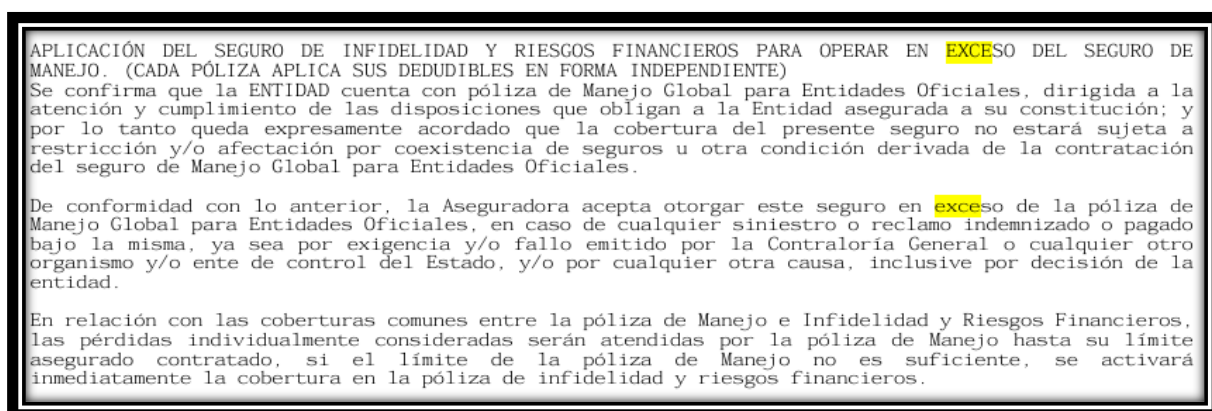
Por tanto, pretender que la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527 cubra una eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios del IDU resulta improcedente, pues ello implicaría modificar el alcance del seguro más allá de sus términos contractuales y lo estipulado en el artículo 1056 del Código de Comercio.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de abril de 2016, Radicado 66001-23-31-000-2010-00455-01

De los términos y condiciones de la póliza se desprende que su cobertura solo se activa cuando se demuestra la existencia de actos fraudulentos o deshonestos cometidos por empleados de la entidad asegurada, lo que no se ha probado en este proceso. No basta con la existencia de un posible perjuicio patrimonial para que la aseguradora esté obligada a responder, sino que es necesario demostrar que dicho perjuicio provino de un acto doloso de un empleado, hipótesis que no se encuentra acreditada en el expediente.

Además, **la póliza fue contratada para operar en exceso de la Póliza de Manejo Global para Entidades Estatales, lo que significa que, incluso si existiera cobertura para los hechos investigados, primero debería agotarse la póliza de manejo que tomara el IDU, lo que no ha ocurrido en este caso.**

Imagen 1



Caratula de la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527, pagina 10.

En consecuencia, es claro que cualquier eventual responsabilidad que el despacho pudiera encontrar sobre los funcionarios del IDU no puede ser trasladada a la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527, pues su objeto, alcance y condiciones excluyen expresamente la cobertura de este tipo de situaciones y esta, **opera exclusivamente en exceso de la póliza de manejo contratada por el IDU.** Lo anterior de conformidad con el clausulado particular de la póliza pactado por las partes

Ahora, si tenemos en cuenta que el IDU no ha aportado prueba que demuestre que la suma asegurada en la póliza de manejo se haya agotado, no se puede afectar la póliza de mi prohijada, pues, debe entenderse dentro del proceso que no se ha agotado el valor asegurado de la primera póliza respondiente.

En virtud de lo expuesto, resulta evidente que la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527 no ampara la posible responsabilidad que pudiera derivarse de la actuación de las funcionarias del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el ejercicio de sus funciones administrativas. Dicha póliza fue contratada exclusivamente para cubrir pérdidas patrimoniales ocasionadas por actos deshonestos o fraudulentos cometidos por empleados con la intención de causar perjuicio a la entidad, lo que no se ha demostrado en el presente proceso.

Además, se debe reiterar que la responsabilidad administrativa o patrimonial derivada de la gestión de los servidores públicos está cubierta por la Póliza de Manejo Global para Entidades Estatales, la cual es distinta de la póliza por la que fue vinculada La Previsora S.A. Compañía de Seguros en este proceso. Pretender trasladar a esta última la cobertura de hechos que no se encuentran dentro de su objeto asegurado desnaturaliza el contrato de seguro y desconoce los principios que rigen su interpretación.

Bajo estos supuestos, se concluye que no existe fundamento jurídico ni contractual para imponer a La Previsora S.A. Compañía de Seguros una obligación indemnizatoria derivada de la actuación de los funcionarios del IDU, pues la póliza invocada no está diseñada para cubrir este tipo de situaciones.

Por lo expuesto, se solicita al despacho declarar probada la presente excepción y, en consecuencia, excluir cualquier pretensión en contra de La Previsora S.A. Compañía de Seguros dentro del presente proceso.

F) INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA PREVISORA S.A, POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO.

Dentro del presente proceso, no se ha acreditado la ocurrencia del riesgo asegurado bajo la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527, contratada entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

El objeto de dicha póliza es amparar pérdidas patrimoniales derivadas de actos deshonestos o fraudulentos cometidos por empleados del IDU con la intención de causar perjuicio a la entidad. Sin embargo, del material probatorio obrante en el expediente no se desprende que las funcionarias del IDU hayan incurrido en una conducta fraudulenta o

dolosa, ni que exista un pronunciamiento judicial o disciplinario que determine su responsabilidad en los hechos investigados.

Al no haberse configurado el riesgo asegurado, La Previsora S.A. no está obligada a indemnizar ninguna suma dentro del presente proceso, pues la póliza solo opera cuando se verifica la ocurrencia del evento asegurado, lo que no ha sucedido en este caso. Respecto de la obligación de indemnizar por la realización del riesgo asegurado el H. Consejo de Estado ha dicho que:

“La obligación del asegurador de indemnizar depende de que el siniestro ocurra dentro de las condiciones pactadas en la póliza. En ausencia de prueba sobre la realización del riesgo asegurado, no es posible exigir el pago de la indemnización”⁶

En el presente caso, del análisis del material probatorio se desprende que no existen pruebas que acrediten que las funcionarias del IDU incurrieron en actos fraudulentos o dolosos, ni que haya existido una infidelidad en la administración de los recursos que pueda dar lugar a la aplicación de la póliza.

Adicionalmente, las funcionarias del IDU no han sido objeto de sanción penal, disciplinaria o administrativa por los hechos objeto de investigación, lo que demuestra que su presunción de inocencia no ha sido desvirtuada, conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

Dado que no se ha demostrado la materialización del riesgo asegurado, no existe una obligación indemnizatoria a cargo de La Previsora S.A. Compañía de Seguros. Pretender que la aseguradora asuma una obligación en estas circunstancias contradice los principios que rigen el contrato de seguro y desvirtúa su naturaleza, pues no puede haber pago sin siniestro.

No existe fundamento para imponer a La Previsora S.A. Compañía de Seguros una obligación indemnizatoria en el presente proceso, pues no se ha acreditado la ocurrencia del riesgo asegurado bajo la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527.

La ausencia de pruebas que demuestren la existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte de las funcionarias del IDU impide activar la cobertura de la póliza, ya que esta

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de septiembre de 2013, Radicado 25000-23-26-000-2004-00203-01

únicamente ampara pérdidas patrimoniales derivadas de infidelidades o fraudes internos cometidos por empleados de la entidad asegurada.

En consecuencia, solicito al despacho declarar probada la presente excepción y, en su lugar, absolver a La Previsora S.A. Compañía de Seguros de cualquier obligación dentro del presente proceso.

G) RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS No. 1001527.

En materia de contrato de seguros, los riesgos excluidos son aquellos eventos que no están amparados dentro del contrato y, en caso de ocurrir, eximen al asegurador de cualquier obligación indemnizatoria. Estas exclusiones se encuentran expresamente establecidas en las condiciones generales y particulares de la póliza.

El Consejo de Estado ha resaltado la importancia de que los jueces tengan en cuenta las exclusiones contractuales al momento de decidir sobre la responsabilidad de una aseguradora. En este sentido, la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527 contiene un apartado específico de exclusiones, dentro de las cuales se destacan aquellas relacionadas con reclamaciones por pérdidas no descubiertas dentro de la vigencia del seguro, pérdidas derivadas de actos u omisiones de miembros de la junta directiva que no sean empleados, eventos de fuerza mayor como guerra o desastres naturales, así como pérdidas resultantes de fraudes financieros, falsificación de documentos o incumplimiento de obligaciones crediticias.

Imagen 2

N. PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN, EXCEPTO CUANDO ESTÉN CUBIERTAS POR LOS AMPAROS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 1, 4, 5 O 6 DE LA CLÁUSULA PRIMERA (AMPAROS) DE ESTE SEGURO.

Clausulado general de la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527

El artículo 1056 del Código de Comercio establece que el asegurador, dentro de los límites legales, tiene la facultad de determinar los riesgos que asume. En virtud de esta disposición, las aseguradoras pueden delimitar su cobertura mediante exclusiones que son parte

integral del contrato y que fueron aceptadas por el tomador al momento de la suscripción de la póliza.

Las exclusiones en este caso cumplen con los requisitos del Estatuto del Consumidor al ser legibles, visibles y comprensibles en la póliza entregada al tomador. Además, la Superintendencia Financiera de Colombia, en diversas interpretaciones, ha reconocido la validez de estas cláusulas, indicando que las exclusiones pueden ser consignadas de manera continua desde la primera página del contrato sin afectar su validez.

En consecuencia, si en el presente caso se configura alguna de las exclusiones establecidas en la Póliza No. 1001527, estas deben ser aplicadas con sus efectos legales, lo que implica la exoneración de cualquier obligación indemnizatoria a cargo de La Previsora S.A. Compañía de Seguros. No puede existir responsabilidad en cabeza de la aseguradora, pues se convino libre y expresamente que determinados riesgos no estaban asegurados.

H) CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización.

Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del

contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por conceptos de: perjuicios denominados por la parte actora “oportunidades perdidas y daños punitivos”, no son de recibo por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte de los demandados quienes no tuvieron ninguna injerencia en el actuar de un tercero el señor “Jiménez Castro”

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la parte actora.

I) EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS No. 1001527.

En el remoto e improbable evento en que el despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en virtud de la póliza vinculada. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán

de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”⁷

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:

Imagen 3

| Riesgo: 1 - | | | | |
|--|---|--------------------------|---------|--------------|
| CL 22 NO. 6 - 27, BOGOTA, CUNDINAMARCA | | | | |
| Categoría: 2-ENTIDADES NO FINANCIERAS | | | | |
| AMPAROS CONTRATADOS | | | | |
| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
| 6 | COBERTURA INFIDELIDAD RIESGOS FINANCIERO | 14,000,000,000.00 | SI | 485,240,000. |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 7 | AMIT | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 8 | TERREMOTO Y/O EVENTOS DE LA NATURALEZA | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 10 | PERDIDAS DE DERECHO DE SUSCRIPCION | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 11 | COSTOS FINANCIEROS PARA EL REEMPLAZO DE | 500,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 30.00DIAS TODA Y CADA PERDIDA | Mínimo 0.00 SMMLV | NINGUNO | |
| 17 | FRAUDES POR COMPUTADOR | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 18 | R.C. MIEMBROS DE JUNTA Y ADMINISTRADORES | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 14,000,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |

Documento: Póliza No. 1001527

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al honorable despacho tomar en consideración que, LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., C no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la póliza antes referida. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001.

J) LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA EN LO ATINENTE AL DEDUCIBLE EN LA PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS No. 1001527.

Adicionalmente, y sin que ello constituya reconocimiento de responsabilidad alguna, es pertinente recordar de todas maneras que no sólo los límites asegurados para cada uno de los amparos otorgados, están concertados en la póliza, sino también el deducible concertado.

En ese orden de ideas, en el contrato de seguro que sirvió como fundamento para llamar en garantía a mí procurada, se pactó un deducible del 10% de valor de la pérdida, con un mínimo de \$ 300,000,000.00, por evento, lo que corresponde al valor que de cada pérdida deberá asumir de su propio peculio el asegurado Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Imagen 4

| AMPAROS CONTRATADOS | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|
| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
| 6 | COBERTURA INFIDELIDAD RIESGOS FINANCIERO | 14,000,000,000.00 | SI | 188,783,193. |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 7 | AMIT | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 8 | TERREMOTO Y/O EVENTOS DE LA NATURALEZA | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 10 | PERDIDAS DE DERECHO DE SUSCRIPCION | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 11 | COSTOS FINANCIEROS PARA EL REEMPLAZO DE | 500,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 30.00DIAS TODA Y CADA PERDIDA | Mínimo 0.00 SMMLV | NINGUNO | |
| 17 | FRAUDES POR COMPUTADOR | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| 18 | R.C. MIEMBROS DE JUNTA Y ADMINISTRADORES | 14,000,000,000.00 | NO | 0.00 |
| | LÍMITE AGREGADO ANUAL | 0.00 | | |
| | LÍMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA | Mínimo 300,000,000.00 \$ | NINGUNO | |
| BENEFICIARIOS | | | | |
| Nombre/Razón Social | | Documento | Porcentaje Tip | |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | | NIT 8999990816 | 100.000 % NO | |

K) COASEGURO E INEXISTENCIA DE SOLIDARIADAD ENTRE LAS COASEGURADORAS

Debe señalarse señor juez que la relación sustancial entre el demandando Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Previsora Compañía de Seguros S.A., surge en el contrato de seguro documentado en la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527, en el cual obra como coaseguradora líder la Previsora Compañía de Seguros S.A., así las cosas,

el llamamiento efectuado a mí defendida, se basa en un contrato de seguro, el cual fue tomado en un tipo contractual denominado coaseguro, el cual se presenta cuando el asegurado promueve o asiente la celebración de un acuerdo entre dos o más aseguradoras, con el fin de distribuir entre ellas el interés y riesgos asegurados, cuya formalización está sometida a la obligatoria reunión de las condiciones establecidas en el artículo 1094 del aludido código, aplicable por remisión expresa del mismo artículo 1095, es decir, se requiere que concurren "(...) 1. *Diversidad de aseguradores*; 2. *Identidad de asegurado*; 3. *Identidad de interés asegurado*, y 4. *Identidad de riesgo*".

En este orden de ideas puede afirmarse que quienes participan en un coaseguro es un conjunto de compañías de seguros, entre las cuales no existe relaciones recíprocas de aseguramiento, pues tales aseguradoras asumen responsabilidades individuales frente a un mismo riesgo, cuya iniciativa nace del asegurado que quiere hacerlas partícipes o de una de éstas con la aceptación del interesado, para efectos de hacer la repartición del riesgo.

Como usted podrá observar en la carátula de la Póliza Riegos Financieros No. 1001527, mi prohijada la Previsora Compañía de Seguros S.A., asumió el 40% de la participación en el negocio jurídico asegurador, de igual manera obsérvese el porcentaje que asumió cada compañía aseguradora:

Imagen 4

| | |
|---|------|
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS..... | 40 % |
| AXA COLPATRIA SEGUROS S.A..... | 20 % |
| MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A..... | 20 % |

Dada la existencia del coaseguro, cada compañía de seguros asumió un porcentaje determinado, destacándose que ni siquiera en el improbable caso de que fueran viables las pretensiones de la parte actora y las que contiene el llamamiento en garantía, podría condenarse a mi representada por lo que le corresponde a las otras coaseguradoras, como quiera que en el coaseguro las aseguradoras no son responsables de forma solidaria, como se desprende del artículo 1092 del Código de Comercio, cada una responderá por el porcentaje de participación en el contrato de seguro.

Se colige de lo anterior, que, en caso de una eventual condena en contra de la Previsora Compañía de Seguros S.A., frente a los riesgos cubiertos por la póliza, se limite la cuantía de la eventual condena en contra de mi procurada al porcentaje de participación que ella tiene en virtud del coaseguro, que en el caso estudiado corresponde al 40%, sin perjuicio del deducible pactado.

L) GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito declarar cualquier otra excepción haya resultado probada dentro del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

III. PETICIONES

Por los argumentos expuestos a lo largo del presente escrito, solicito respetuosamente a su despacho, al **JUZGADO SESENTA Y TRES (63) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**, lo siguiente:

- A. DECLARAR PROBADAS** las excepciones propuestas a lo largo de las etapas procesales y en consecuencia **NEGAR** las pretensiones de la demanda esgrimidas contra el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU**.
- B. SE EXIMA DE RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA** a **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, por los argumentos expuestos a lo largo del proceso.

Subsidiariamente:

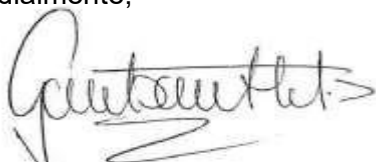
- C.** Que en el improbable y remoto evento en el que se realice el riesgo asegurado por **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, pese a que es indiscutible que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos para ello, comedidamente solicito se tenga en cuenta la cláusula de coaseguro suscrita con las demás compañías llamadas en garantía, el

límite del valor asegurado y los deducibles del valor de la pérdida pactados en la Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros No. 1001527.

IV. NOTIFICACIONES

A mi mandante y al suscrito apoderado en la Carrera 11ª #94ª-23 – Bogotá D.C Oficina 201 y en el correo electrónico notificaciones@gha.com.co.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 expedida en Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.